

041/2025

I

El proyecto de Decreto regula la creación del Registro de personal de atención directa que presta sus servicios en centros de protección y reforma de menores, ya sean centros propios, concertados o contratados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Su objetivo es organizar y mantener actualizado un censo que permita garantizar el cumplimiento de las competencias autonómicas en materia de protección de la infancia y la adolescencia, así como la intervención ante la violencia ejercida sobre menores. Asimismo, el Decreto establece el régimen de tratamiento de los datos personales contenidos en el Registro, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos.

La norma se compone de una parte expositiva y once artículos, en los que se detallan el objeto, la naturaleza, el funcionamiento, el contenido, las condiciones de inscripción y acceso, así como el régimen de certificación y tratamiento de datos del Registro.

El artículo 1 delimita el objeto del Decreto, centrado en la creación del Registro y la regulación de su funcionamiento y del tratamiento de datos personales. El artículo 2 define el ámbito de aplicación, circunscrito al personal de atención directa en centros de protección de menores y de internamiento por medidas judiciales, especificando las categorías profesionales incluidas.

En el artículo 3 se establece la finalidad del Registro como herramienta informativa, operativa y de control, vinculada a las actuaciones del Gobierno de Aragón. El artículo 4 determina la naturaleza administrativa, autonómica y no pública del Registro, que tiene efectos declarativos.

El artículo 5 regula su adscripción al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y asigna funciones al servicio competente, incluyendo validación de inscripciones, certificaciones y control de acceso. El artículo 6 detalla los datos que deben inscribirse, diferenciados en datos identificativos, profesionales, de la relación laboral y antecedentes sobre delitos sexuales.

El artículo 7 establece las condiciones de acceso al Registro, reservándolo a responsables de centros, personal autorizado de la

Administración y a los propios profesionales, garantizando en todo caso la confidencialidad. El artículo 8 regula el procedimiento de inscripción, que debe realizarse telemáticamente por parte de los responsables de los centros, estableciendo plazos, validación y numeración de los registros, así como las consecuencias del incumplimiento.

El artículo 9 contempla la obligación de comunicar cualquier modificación o cancelación de los datos y establece su régimen sancionador. El artículo 10 prevé la expedición de certificaciones por parte del servicio competente, únicamente a solicitud de los interesados respecto de sus propios datos. Por último, el artículo 11 regula el tratamiento de los datos personales conforme a la legislación europea y nacional, garantizando su uso exclusivo para las finalidades previstas y reconociendo los derechos de las personas inscritas.

Las previsiones contenidas en el Decreto que se informa se enmarcan en el desarrollo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón y el Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo. Estas normas establecen el marco jurídico *en la Comunidad Autónoma de Aragón* para la protección social y jurídica de los menores en situaciones de riesgo y desamparo, diseñando un sistema escalonado de responsabilidad compartida entre los padres de un menor y los poderes públicos.

En este contexto, el artículo 45 de la citada Ley 12/2001, de 2 de julio, de Aragón, define la protección de menores como *“el conjunto de actuaciones que, en el marco del sistema público de servicios sociales, tiene como finalidad prevenir, detectar y corregir las situaciones de riesgo y de desamparo, mediante la integración del menor en grupos naturales de convivencia, en condiciones básicas suficientes que posibiliten su participación en la vida familiar, económica, social y cultural, y su desarrollo integral como persona”*.

Habida cuenta del objeto del Decreto que se informa, se prevé la recogida y tratamiento de un amplio conjunto de datos de carácter personal, cuyo análisis de necesidad se impone en atención a las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a «datos personales» como toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

Por su parte, el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que: *“Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.”*

Pues bien, según se extrae del texto normativo que se informa —de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del proyecto de Decreto—, por parte del órgano competente —Instituto Aragonés de Servicios Sociales— **se procederá al tratamiento de datos de carácter personal**, que serán incorporados al Registro de personal de atención directa que presta sus servicios en centros de protección y reforma de menores, ya sean propios, concertados o contratados por dicho Instituto.

En particular, como se expuso anteriormente, conforme al artículo 1, se establece expresamente que uno de los objetos del Decreto es regular el tratamiento de los datos personales que consten en el mencionado Registro. El artículo 5 señala que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales será el

encargado de la implantación, mantenimiento y gestión del Registro, asumiendo, entre otras funciones, la validación de inscripciones, la expedición de certificaciones y la autorización de accesos, lo que conlleva el tratamiento directo y continuado de datos personales.

En este sentido, para la determinación del responsable del tratamiento de los datos de carácter personal objeto del Decreto, habrá de estarse a la definición del artículo 4.7 del RGPD, cuando dispone que dicha condición corresponde a *“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; (...)”*, y, en su virtud, concretar con carácter general en quién concurre dicha figura.

En este sentido, del análisis del texto sometido a informe, se extrae con la debida claridad la determinación del órgano **responsable del tratamiento**, concurriendo dicha condición en el **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**. Esta conclusión deriva de la normativa con rango de ley de la que trae causa el proyecto de Decreto que se informa, y muy especialmente de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón, en cuyo artículo 82 y 85 se dispone que:

“Artículo 82. Órganos competentes.

Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia en materia de protección y de ejecución de medidas de reforma de los menores, que ejercerá a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adscrito al Departamento competente por razón de la materia.”

Artículo 85. Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

1. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adscrito al Departamento competente por razón de la materia, tendrá, en el marco de esta Ley, como objetivos básicos:

a) Promover políticas integrales de atención a la infancia y la adolescencia.

b) Promover políticas de protección a la familia, en cuanto núcleo básico de socialización de menores, para conseguir la integración social y familiar de los niños y adolescentes.

c) Coordinar las actuaciones sectoriales que desde las diferentes Administraciones públicas e instituciones privadas se desarrollen para la atención de la infancia y la adolescencia.

2. Corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales el ejercicio de las competencias en materia de protección y reforma de menores atribuidas a la Administración de la Comunidad Autónoma por el Código Civil, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y demás legislación civil aplicable, por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y por la presente Ley, así como por sus disposiciones concordantes.”

A su vez, los preceptos transcritos constituyen un claro desarrollo de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, que atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de acción social. Esta competencia comprende (i) la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección, entre otros colectivos necesitados de protección especial, de la infancia (artículo 71, apartado 34), e (ii) importantes atribuciones en materia de menores, que incluyen la regulación del régimen de protección y tutela de los menores desamparados o en situación de riesgo (artículo 71, apartado 39).

III

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. En concreto, de acuerdo con el **artículo 6** –“Licitud del tratamiento”-, del **RGPD**, entre otros, dicho tratamiento es lícito y legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; (La negrita es nuestra)

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

Tal y como se ha expuesto —conforme establecen los artículos 82 y 85 de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón— las competencias en materia de protección y de ejecución de medidas de reforma de los menores (en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón) se ejercen a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Las citadas previsiones normativas, establecidas en una norma con rango de ley formal que, a su vez, supone una concreción y desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón, responden a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGDD, cuando dispone que:

*“**Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.***

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con **rango de ley**, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. (La negrita es nuestra)

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con **rango de ley**.” (La negrita es nuestra)

IV

Por otra parte, en el artículo 6 del Decreto que se informa se detalla el conjunto de datos identificativos, profesionales y laborales que habrán de ser inscritos, incluyendo —entre otros— el nombre, DNI, sexo, dirección, titulación, centro de trabajo, fechas de inicio y fin de relación laboral, y resultado de la consulta sobre delitos sexuales, evidenciando con ello el alcance del tratamiento a realizar.

Así, los efectos prácticos de la norma que se informa se concretan en la recogida y tratamiento de diversos tipos de datos de carácter personal de las personas físicas afectadas por los tratamientos.

Las actuaciones contempladas en el proyecto de Decreto —y especialmente la identificación de los sujetos afectados—, **implicarán** necesariamente tratamientos de los datos de carácter personal. Dicha previsión debe cohesionarse con los principios de protección de datos recogidos en el **artículo 5** del Reglamento General de Protección de Datos. A los efectos que aquí interesan, el mencionado artículo 5, en su apartado 1, se refiere a los principios de limitación de la finalidad, minimización y exactitud, limitación del plazo de conservación, e integridad y confidencialidad:

“5.1 Los datos personales serán:

(...)

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales (**«limitación de la finalidad»**);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (**«minimización de datos»**);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan (**«exactitud»**);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado (**«limitación del plazo de conservación»**);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (**«integridad y confidencialidad»**).”

En los artículos 7 y 8 del Decreto sometido a informe se describen las condiciones de acceso al Registro y el procedimiento de inscripción,

respectivamente, estableciendo que tanto la remisión de datos como su validación se efectuarán a través de medios electrónicos, mediante una plataforma o aplicación informática habilitada por el propio Instituto. Además, se indica que el acceso a los datos estará limitado a **personas autorizadas**, previa suscripción del correspondiente **compromiso de confidencialidad**, y que las personas titulares de los datos podrán consultar únicamente los suyos.

Así, los citados preceptos establecen un régimen de acceso al Registro limitado a dos tipos de sujetos: por un lado, los responsables de los centros incluidos en el ámbito de actuación, y por otro, el personal empleado público expresamente autorizado por el Departamento competente o por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Ambos supuestos se ajustan al principio de **limitación del acceso a datos personales solo a personas legitimadas**, de acuerdo con el **artículo 5.1.f)** del RGPD, que exige garantizar la seguridad e integridad de los datos personales mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, entre ellas la restricción del acceso solo a personal debidamente autorizado. Asimismo, el acceso queda vinculado al **ejercicio legítimo de funciones**, conforme al principio de *licitud del tratamiento* recogido en el **artículo 6.1.c) y e)** del RGPD (cumplimiento de una obligación legal, o por interés público o ejercicio de poderes públicos), y en el **artículo 8 de la LOPDGDD**, que precisa las exigencias normativas del tratamiento de datos por parte de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, la inclusión expresa de la obligación de suscribir un **compromiso de confidencialidad** por parte de quienes acceden al Registro resulta plenamente conforme con el **artículo 29 del RGPD**, que establece que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable del tratamiento y tenga acceso a datos personales no podrá tratarlos salvo que haya sido autorizada y se le haya instruido en ello. En la misma línea, el **artículo 32 del RGPD**, que regula las medidas de seguridad del tratamiento, impone la necesidad de asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas de acceso a datos. Esta exigencia también se encuentra reflejada en el **artículo 28 de la LOPDGDD**, que exige la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de los principios del tratamiento y el deber de confidencialidad del personal con acceso a datos.

Por su parte, el artículo 9 impone la obligación de comunicar cualquier modificación o cancelación de datos, lo que implica un tratamiento continuo y actualizado de la información contenida en el Registro, y el artículo 10 habilita al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a través del órgano competente, para expedir certificaciones acreditativas de los datos inscritos, lo que supone una nueva manifestación del tratamiento regulado.

En consecuencia, las previsiones de los artículos 6, 7, 8 y 9 del Decreto que se informa, respetan plenamente las exigencias del artículo 5.1 del RGPD, en tanto que los datos personales tratados resultan limitados a la finalidad prevista, deviniendo adecuados, pertinentes y limitados a dichos fines, y comprendiendo la debida actualización y exactitud de los mismos en función de las diversas circunstancias contempladas en el Decreto.

Finalmente, el artículo 11 establece expresamente las condiciones legales para el tratamiento de los datos personales incorporados al Registro, remitiéndose al Reglamento (UE) 2016/679, a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y al resto de la normativa vigente en materia de protección de datos, determinando que los datos solo podrán ser utilizados para garantizar el cumplimiento de las competencias en materia de protección de menores, y que deberán aplicarse las correspondientes medidas de seguridad. Asimismo, se prevé que las personas interesadas puedan ejercer sus derechos a través de los formularios habilitados en la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

En este punto se advierte la **existencia de un claro error que debe subsanarse** en orden a la correcta fundamentación del contenido de la norma que se analiza, por cuanto en el citado artículo 11.3 del proyecto de Decreto, se prevé una remisión a normas reglamentarias derogadas, al señalarse que *“El responsable del tratamiento de datos personales incluirá en todo caso, las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con el **Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre**, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”*.

Sin embargo, el mencionado Real Decreto 1720/2007 fue derogado por la disposición derogatoria única, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, al igual que la propia Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que también fue derogada por dicha disposición.

En consecuencia, la referencia normativa relativa a las **medidas de seguridad que debe aplicar el responsable del tratamiento deberá sustituirse por una remisión a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD**, que regula la *“Seguridad del tratamiento”*, y al **artículo 28 de la LOPDGDD**, que establece las obligaciones específicas en esta materia, señalando que las medidas a adoptar deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.

De acuerdo con lo anterior, para dicho párrafo del artículo 11 se sugiere una redacción que podría incorporar el siguiente contenido u otro similar:

“3. El responsable del tratamiento de datos personales adoptará, en todo caso, las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y con el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Las medidas de seguridad a adoptar serán técnicas y organizativas y deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.”

Por lo demás, (i) **el artículo 11.1**, remite expresamente al marco normativo vigente en materia de protección de datos personales, señalando que *“El tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro se ajustará a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (...) y demás normativa vigente sobre protección de datos personales.”*, (ii) **el artículo 11.2**, refuerza la plena aplicación de las previsiones del artículo 5.1. letra b) del RGPD al establecer que: *“Los datos no podrán ser utilizados, en ningún caso, para una finalidad distinta que la garantía del cumplimiento de las competencias en materia de protección de la infancia y la adolescencia...”*, y (iii) **el artículo 11.4**, habilita el ejercicio de derechos por parte de las personas interesadas mediante: *“los formularios normalizados disponibles en la sede electrónica del Gobierno de Aragón.”*

A la vista de la dicción literal del apartado 2 del artículo 11, y de su referencia específica al principio de limitación de la finalidad, se considera conveniente reforzar la fundamentación jurídica del precepto mediante la inclusión expresa del sometimiento de los tratamientos de datos personales al conjunto de principios establecidos en el artículo 5 del RGPD. En este sentido, **se sugiere** que dicho apartado incorpore una mención explícita al citado artículo 5, pudiendo optarse por una redacción igual o similar a la siguiente:

“11.2. Los datos no podrán ser utilizados, en ningún caso, para una finalidad distinta que la garantía del cumplimiento de las competencias en materia de protección de la infancia y la adolescencia y de detección e intervención frente a la violencia ejercida sobre los menores, realizándose todos los tratamientos de datos personales con estricta observancia de los principios del artículo 5 del

**Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016. (La negrita es adición sugerida)**

V

Por lo demás, en el Decreto analizado se realizan múltiples referencias al sometimiento de los tratamientos de datos realizados a la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, en los términos recogidos por el Reglamento General de Protección de Datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En concreto, se recoge dicho sometimiento en los siguientes artículos del proyecto de Decreto:

- **Artículo 1.2**, al señalar como objeto que: *“el presente Decreto establece el marco normativo en el que se debe producir el tratamiento de los datos de carácter personal que consten en este Registro, de acuerdo con la normativa de protección de datos de carácter personal.”*
- **Artículo 5.2**, al disponer que: *“El encargado del registro, como órgano responsable, dará cumplimiento a la normativa en materia de protección de datos.”*
- **Artículo 7.2**, al prever que el acceso al Registro deberá realizarse garantizando la confidencialidad y protección de los datos personales, exigiéndose que: *“las personas a las que se reconoce acceso a este registro tienen que suscribir el correspondiente compromiso de confidencialidad en relación con la información a que tengan acceso.”*
- **Artículo 7.3**, que reconoce a las personas titulares de los datos el derecho a consultar los suyos propios *“en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente de protección de datos.”*
- **Artículo 10.2**, al establecer que las solicitudes de expedición de certificados solo podrán referirse a los datos del propio solicitante *“en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (...) y en la normativa vigente de protección de datos.”*

Estas reiteradas **referencias** evidencian la voluntad expresa del legislador autonómico de someter los tratamientos de datos previstos en el Decreto al cumplimiento íntegro de la legislación europea y nacional en materia de protección de datos personales, **debiendo mantenerse esta regulación** en el articulado y desarrollo normativo del texto definitivo.

VI

Finalmente, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de los menores en acogimiento residencial, el Decreto que se informa incorpora exigencias relevantes para el personal que presta servicios en los centros de protección de menores, exigiendo la inscripción del “d) *Resultado de la Consulta de inexistencia de Delitos Sexuales, de su artículo 6 (Datos de inscripción en el Registro)*”.

Esta exigencia se refuerza especialmente en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, destacando, en particular, la **ausencia de antecedentes por delitos sexuales**. Todo ello en consonancia con lo dispuesto en el Título V, Capítulos I y II, artículos 56 y siguientes de la mencionada Ley Orgánica, que establecen que:

“TÍTULO V

De la organización administrativa

CAPÍTULO I

Registro Central de información

Artículo 56. *Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia.*

1. Con la finalidad de compartir información que permita el conocimiento uniforme de la situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, el Gobierno establecerá, mediante real decreto la creación del Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, así como la información concreta y el procedimiento a través del cual el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el RUSSVI y las distintas administraciones públicas deben suministrar los datos requeridos al registro.

El real decreto señalará la información que debe notificarse anonimizada al Registro que, como mínimo, comprenderá los siguientes aspectos:

- a) Con respecto a las víctimas: edad, sexo, tipo de violencia, gravedad, nacionalidad y, en su caso, discapacidad.
- b) Con respecto a las personas agresoras: edad, sexo y relación con la víctima.
- c) Información policial (denuncias, victimizaciones, etc.) y judicial.
- c) Medidas puestas en marcha, frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia.

2. El Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia quedará adscrito orgánicamente al departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en políticas de infancia.

3. Con los datos obtenidos por el Registro se publicará anualmente un informe de la situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia al que se dará la mayor publicidad posible.”

“CAPÍTULO II

De la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos

Artículo 57. *Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad.*

1. Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

2. A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad.

3. Queda prohibido que las empresas y entidades den ocupación en cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

Artículo 58. *Consecuencias de la existencia de antecedentes en caso de personas trabajadoras o aquellas que realicen una práctica no laboral que conlleve el alta en la Seguridad Social.*

1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellos trabajos o actividades que impliquen contacto habitual con personas menores conlleva la imposibilidad legal de contratación.

2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos conlleva el cese inmediato de la relación laboral por cuenta ajena o de las prácticas no laborales. No obstante, siempre que fuera posible, en atención a las

circunstancias concurrentes en el centro de trabajo y a la actividad desarrollada en el mismo, la empresa podrá efectuar un cambio de puesto de trabajo siempre que la nueva ocupación impida el contacto habitual con personas menores de edad.

De conformidad con lo anterior, el trabajador por cuenta ajena deberá comunicar a su empleador cualquier cambio que se produzca en dicho Registro respecto de la existencia de antecedentes, aun cuando estos se deriven de hechos anteriores al inicio de su relación laboral. La omisión de esta comunicación será considerada como incumplimiento grave y culpable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.

Esta obligación de comunicación, así como las consecuencias de su incumplimiento, deberán incluirse también en los acuerdos que se suscriban entre las empresas y los beneficiarios de las prácticas no laborales que se formalicen al amparo del Real Decreto 1543/2011, de 31 de diciembre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.”

En este sentido, se observa que, por parte del responsable del tratamiento, se dará el debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del RGPD, cuando dispone que:

“Artículo 10. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales.

El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas.”

En similares términos, el artículo 10 de la LOPDGDD, establece que:

“Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal.

1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, **solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.** (La negrita es nuestra)

2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.”

Esta Agencia ha tenido ocasión de analizar en profundidad las previsiones contenidas en la normativa sobre certificación de antecedentes penales de delincuentes sexuales, en distintos informes emitidos en el marco de procedimientos normativos. En particular, cabe citar el Informe 0053/2020, relativo al anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, así como, más recientemente, el Informe 0026/2023, emitido en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Registro Central de Delincuentes Sexuales. En este último, se reproduce parcialmente la argumentación recogida en el Informe 0008/2019, referido al Anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en los siguientes términos:

“VI

I

El Capítulo II del Título V se refiere a la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, “desarrollando y ampliando la protección de las personas menores de edad a través del perfeccionamiento del sistema de exigencia del requisito de no haber cometido delitos contra la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual para desarrollar actividades que supongan contacto habitual con personas menores de edad”, tal y como señala su Exposición de Motivos”.

Esta Agencia ha tenido ocasión de pronunciarse en relación con el acceso a los datos que figuran en el Registro Central de Delincuentes Sexuales en sus informes de 25 de julio de 2014, referente al Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia y de 13 de octubre de 2015, relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

En el Informe de 25 de julio de 2014, en relación con el requisito actualmente

recogido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, se señalaba lo siguiente:

“Para ello debe partirse como premisa del hecho de que, a diferencia de lo que señala la Exposición de Motivos, y sin perjuicio de lo ya señalado en cuanto a la inexactitud de su fundamentación legal, el citado artículo 13.5 no implica necesariamente la creación de ningún tipo de registro o base de datos referida específicamente a los autores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores, sino que sólo establece como requisito imprescindible para el ejercicio de actividades que implique el contacto habitual con niños que el interesado no haya sido condenado por la comisión de estos delitos.

En consecuencia, lo que prevé el Anteproyecto es que con carácter previo a la prestación de los servicios a los que se refiere el Anteproyecto el empleador o la Administración que autorice el desarrollo de la actividad puedan conocer que el interesado carece de antecedentes relacionados con la comisión de estos delitos.

Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el interesado, pese a la valoración que haya de hacerse de la conducta que condujo a la condena penal por los delitos mencionados, no deja de ser titular del derecho fundamental a la protección de sus datos de carácter personal, por lo que una medida restrictiva de este derecho deberá en todo caso respetar el principio de proporcionalidad, en los términos consagrados por el Tribunal Constitucional, y además como consecuencia del principio de injerencia mínima producir la mínima intromisión en ese derecho.

Dicho esto, no cabe duda de que la previa condena por la comisión de los delitos mencionados en el artículo 13.5 es generadora de una situación de riesgo para la libertad e integridad sexual de los menores de edad con los que pudiera trabajar el condenado, siendo así que los derechos del menor se encuentran especialmente garantizados a partir de la aplicación del interés superior de aquéllos, previsto expresamente en el artículo 2 de la Ley 1/1996. No debe olvidarse lo ya señalado en el apartado III de este informe en cuanto a la importancia y relevancia que ha de otorgarse a este principio, siendo especialmente importante traer a colación en este momento que, si bien esta Agencia ha declarado que su aplicación podría no bastar por sí misma como fundamento para el tratamiento de datos de carácter personal, ello se ha señalado cuando el tratamiento se refiere a los datos del propio menor, dado que la colisión se produce entonces entre la protección de su interés superior y el derecho a la protección de datos. Sin embargo, en el caso al que ahora se está haciendo referencia, el acceso a los datos al que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, en la redacción propuesta no afectaría a los datos del menor, sino únicamente a los de los terceros que pretendieran realizar actividades que impliquen un contacto habitual con niños.

Por este motivo, la protección del interés superior del menor podría considerarse causa legal suficiente para amparar el acceso a la información por parte de quien pretenda contratar al interesado o por la Administración

que hubiera de autorizar la realización de tales actividades.

Pero, ya se ha dicho, para ello deberá darse cumplimiento a las garantías del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, lo que por una parte exigiría valorar si resulta necesaria la creación de un registro específico para atender a la finalidad perseguida y, por otra, obligaría a analizar las condiciones en que debería producirse dicho acceso.

En cuanto a la creación del registro, debe tenerse en cuenta que el artículo 13.5 se refiere a la existencia de condenas por sentencia firme. En este sentido, no debe olvidarse que el artículo 2. 3 a) del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia integra en el mencionado sistema al Registro Central de Penados, en el que se procederá a “la inscripción de las resoluciones firmes por la comisión de un delito o falta que impongan penas o medidas de seguridad, dictadas por los Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional penal”. Es decir, la información referida a las condenas firmes ya se incorpora a un registro existente, lo que parece hacer innecesaria la creación de otro sistema de información distinto, quedando el tratamiento de los datos sometido además a las normas de este registro ya existente en cuanto a sus accesos y conservación de la información.

Sentado lo anterior, debería ahora valorarse cómo podría verificarse el cumplimiento por el interesado de la condición establecida en el artículo 13.5 propuesto; es decir, el procedimiento de acreditación de la inexistencia de los antecedentes penales. A tal efecto, ciertamente los artículos 5 y 6 del Real Decreto mencionado, referidos al acceso a los registros del sistema en general y al registro de penados en particular, no prevén los accesos a la información a los fines que se establecen en el artículo 13.5.

No obstante, el artículo 17.1 del Real Decreto establece claramente que “A petición del titular interesado, podrán certificarse directamente los datos relativos a su persona contenidos en las inscripciones de los Registros Centrales de Penados, de Medidas Cautelares Requisitorias y Sentencias No Firmes, de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y de Rebeldes Civiles y suscribir certificaciones negativas respecto a personas que no figuren inscritas en los mismos”, existiendo diversos supuestos en las normas actualmente vigente que exigen la aportación de este tipo de certificaciones para la realización de determinados trámites o la obtención de autorizaciones, pudiendo incluso encontrarse ejemplos de la exigencia de este requisito en el ámbito laboral en relación con sectores específicos.

Pues bien, siendo posible que el legislador pueda exigir la aportación de una certificación negativa por el interesado para que proceda la autorización del mismo para la realización de actividades que impliquen un contacto habitual con niños o para la contratación del interesado para la realización de esas actividades, parece lógico que la medida que permite una mejor conciliación de la especial protección del interés superior del menor, consagrado por el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 con el derecho a la protección de datos de carácter personal sería la exigencia de esa certificación negativa del

registro, referida específicamente a la comisión de los delitos mencionados por el artículo 13.5.

(...)

En consecuencia, y conforme al criterio reiterado de esta Agencia, debe señalarse que el reconocimiento del **derecho fundamental a la protección de datos personales subsiste incluso en los supuestos en los que concurre una condena penal**, siendo exigible que cualquier medida restrictiva de dicho derecho respete el **principio de proporcionalidad y se sujete al principio de injerencia mínima**. En este contexto, la protección del interés superior del menor —configurada como un principio rector del ordenamiento jurídico, conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor— puede constituir una base jurídica suficiente para amparar el **acceso limitado a determinada información penal**, en particular a través de la exigencia de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Esta medida, además de ajustarse a los fines legítimos perseguidos por el legislador, permite compatibilizar adecuadamente la salvaguarda de los menores con el respeto a los derechos fundamentales del afectado, en especial su derecho a la protección de datos de carácter personal.

VII

En conclusión, se sugiere la modificación del artículo 11 del Decreto que se informa, en los términos en los que ha quedado expuesto.

En resumen, en relación con el apartado 3 del artículo 11 del Decreto, que contiene una remisión normativa a disposiciones derogadas, **se sugiere** la adopción de una redacción que podría incorporar el siguiente contenido u otro similar:

“3. El responsable del tratamiento de datos personales adoptará, en todo caso, las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y con el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Las medidas de seguridad a adoptar serán técnicas y organizativas y deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.”

Por otra parte, a la vista del contenido del apartado 2 del artículo 11, y de su referencia específica al principio de limitación de la finalidad, se considera conveniente reforzar la fundamentación jurídica del precepto mediante la inclusión expresa del sometimiento de los tratamientos de datos personales al conjunto de principios establecidos en el artículo 5 del RGPD. En este sentido, **se sugiere** que dicho apartado incorpore una mención explícita al citado artículo 5, pudiendo optarse por una redacción igual o similar a la siguiente:

“11.2. Los datos no podrán ser utilizados, en ningún caso, para una finalidad distinta que la garantía del cumplimiento de las competencias en materia de protección de la infancia y la adolescencia y de detección e intervención frente a la violencia ejercida sobre los menores, realizándose todos los tratamientos de datos personales con estricta observancia de los principios del artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.